

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501220170102201
Proceso:	Ordinario
Demandante:	MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA Y JUAN MANUEL SALAZAR FLÓREZ
Demandado:	COLFONDOS S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	29/08/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) agosto de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA Y JUAN MANUEL SALAZAR FLÓREZ
DEMANDADA	COLFONDOS S.A.
ORIGEN	Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105012201701022 01
TEMAS	Pensión de sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de Segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por las Magistradas ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA Y JUAN MANUEL SALAZAR FLÓREZ contra COLFONDOS S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora Margarita Aurora Flórez Zapata y el menor Juan Manuel Salazar Flórez formularon demanda contra COLFONDOS S.A. pretendiendo **i)** se declare que tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Alain Darío Salazar Granda; se ordene **ii)** el pago de la prestación, incluidas medadas adicionales; **iii)** intereses de mora; y **iv)** costas procesales.

Fundamentaron sus pretensiones en que la señora Flórez Zapata contrajo matrimonio católico con el señor Alain Darío Salazar Granda el 06 de mayo de 1989, procreando tres hijos, dos mayores de 25 años para cuando fallece el padre, y Juan Manuel Salazar Flórez, quien nació el 16 de marzo de 2004. Los cónyuges convivieron hasta el 23 de febrero de 2017 fecha en que falleció el señor Salazar Granda. La cónyuge se presentó a Colfondos

¹ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pags.3/4

S.A. a reclamar la pensión de sobrevivientes, siendo negada por no haber sido causada; lea fue reconocida la suma de \$92.570.391 por concepto de indemnización sustitutiva en proporción del 50% para cada uno.

Expresa que su cónyuge fue víctima de homicidio el 23 de febrero de 2017 fecha en la que se dirigía a trabajar de manera independiente como vigilante en el barrio Belén, fecha para la cual contaba con 1.277 semanas de cotización.

Oposición a las pretensiones de la demanda

COLFONDOS S.A.²

El afiliado no causó la pensión de sobrevivientes, pues no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, no siendo posible reconocer y pagar la prestación, intereses de mora o indexación. Excepcionó: inexistencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, cumplimiento de la obligación de devolución de saldos, buena fe, prescripción, compensación y pago.

Sentencia de Primera Instancia

El 24 de septiembre de 2018, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia absolviendo a COLFONDOS S.A. de las pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte demandante, a favor de quien concedió el grado jurisdiccional de consulta.

Como fundamento de su decisión indicó que el afiliado no dejó causada la pensión de sobrevivientes según los parámetros del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues no efectuó cotización alguna entre el 23 de febrero de 2014 y el 23 de febrero de 2017, tampoco acreditó la densidad mínima de semanas para tener causado la pensión de sobrevivientes de conformidad con el parágrafo de la referida norma pues únicamente acreditó 1.277 semanas, sostuvo que no adquirió la pensión bajo la condición más beneficiosa en tanto únicamente se puede analizar la prestación conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original y esta le exigía 26 semanas de cotización dentro del año anterior al fallecimiento, circunstancia que tampoco fue acreditada.

La sentencia no fue apelada, razón por la cual se conoce en grado jurisdiccional de consulta.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Otorgado el término a ambas partes para alegar de conclusión en esta instancia, **la activa** lo recorrió oportunamente. Adujo que la norma aplicable para el estudio de la pensión de sobrevivientes correspondía al artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en tanto el fallecimiento ocurrió el 23 de febrero de 2014 (sic) y si bien la juez A-quo estudió la condición más beneficiosa, únicamente analizó el cumplimiento de los requisitos bajo el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original, sin tener en cuenta que el causante dejó acreditados los

² 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág.93/98

requisitos del Decreto 758 de 1990 al tener 300 semanas de cotización al momento de su fallecimiento, razón por la cual considera que debe revocarse la sentencia de primera instancia; debe aplicarse la condición más favorable en tanto el demandante no reunía el capital necesario para dejar causada la pensión de vejez, razón por la cual debía aplicársele la garantía de pensión mínima para la cual únicamente le eran exigibles 1150 semanas, habiendo cotizado 1277 semanas. Esas semanas que dejó acreditadas corresponden al 98,2% de las 1300 semanas que requiere, siendo el 100% el número entero más próximo, debe por tanto reconocerse la pensión de sobrevivientes, entendiendo cumplidas las semanas por aproximación, aduciendo que no se debe perder de vista que el legislador reconoció el esfuerzo en cuanto las cotizaciones disponiendo para la pensión de invalidez una densidad menor cuando se hubiera cotizado el 75% de las semanas mínimas requeridas.

Trámite en segunda instancia

Por considerarlo pertinente y necesario, fue reabierto el debate probatorio, decretándose interrogatorio de parte de oficio, citando a la señora Margarita Aurora Flórez Zapata, así mismo citó para ampliar testimonio a Sul Mery Úsuga Velásquez y José Aldemar Salazar Granda, sin poderse recaudar el testimonio de la señora Sul Mary Úsuga, al no haber sido posible su plena identificación el día de la diligencia.

Así mismo se requirieron como prueba de oficio a cargo de la parte actora los certificados de estudio del joven Juan Manuel Salazar Flórez y la historia laboral de la demandante.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por lo dispuesto en el art. 69 del CPTSS.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, entiende la Sala, que el problema jurídico a resolver se restringe a determinar: **a)** Si Alain Darío Salazar Granda causó la pensión de sobrevivientes deprecada en la demanda; En caso de ser así, se decidirá **b)** si Margarita Aurora Flórez Zapata y Juan Manuel Salazar Flórez son beneficiarios de la misma, así como **c)** las condiciones de disfrute de la prestación.

Documentos relevantes glosados al proceso

- Margarita Aurora Flórez Zapata nació el 06 de marzo de 1968³.
- Alain Darío Salazar Granda nació el 05 de julio de 1961⁴ y falleció el 23 de enero de 2017⁵.

³ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 37, según se desprende de la copia de cedula de ciudadanía, pues no fue aportado registro civil de nacimiento, pero tampoco se discute tal fecha.

⁴ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 36, según se desprende de la copia de cedula de ciudadanía, pues no fue aportado registro civil de nacimiento, pero tampoco se discute tal fecha.

⁵ 01PrimeraInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 20

- Margarita Aurora Flórez Zapata y Alain Darío Salazar Granda contrajeron matrimonio católico el 06 de mayo de 1989⁶.
- Juan Manuel Salazar Flórez nació el 16 de marzo de 2004⁷.
- El 05 de mayo de 2017 Colfondos S.A. niega a la señora Margarita Aurora Flórez Zapata y al menor Juan Manuel Salazar Flórez la pensión de sobrevivientes ordenando la devolución de Saldos, dejando bajo la administración de la señora Flórez Zapata el dinero del menor⁸.
- Según historia laboral de Colfondos S.A., el causante dejó acreditadas 1.277 semanas en toda su vida laboral, efectuando su última cotización para el ciclo de julio de 2013⁹.
- A los demandantes les fueron desembolsados \$92.534.646 correspondientes a la devolución de saldo de la cuenta de ahorro individual del señor Alain Darío Salazar Granda¹⁰.

a) Causación de la pensión de sobrevivientes

La norma vigente al momento de acaecer la contingencia de muerte del causante, rige las condiciones jurídicas para resolver la prestación de sobrevivientes. Alain Darío Salazar Granda falleció el 23 de enero de 2017¹¹, en vigencia del art.73 de la Ley 797 de 2003, cuyo tenor literal consagra:

“Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente Ley”.

El referido art.46 dispone en el numeral segundo:

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

El párrafo 1 de esa misma norma, consagra:

“Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

⁶ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 18/19

⁷ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 21/22

⁸ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 15/17

⁹ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 27/32

¹⁰ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 99

¹¹ 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigitalizado, pág. 20

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este párrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez”.

La historia laboral allegada y expedida por COLFONDOS S.A.¹², da cuenta de una densidad en cotizaciones equivalente a **1277** semanas durante su vida laboral, de las cuales **ninguna** lo fue durante los tres años anteriores a la ocurrencia del deceso, por tanto, se concluye que el afiliado no acreditó las semanas mínimas exigidas por la Ley 100 de 1993 para causar la pensión de sobrevivientes, como tampoco a la de vejez. es importante anotar que no asiste razón a la activa cuando pretende que se entienda que la norma refiere a la garantía de pensión mínima, pues la norma es clara cuando refiere a la de vejez regulada en el Régimen de Prima Media, sin que pueda atender al número de semanas para acceder en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a la mencionada garantía.

Tampoco es acertada la interpretación en relación con la aproximación, en tanto la activa pretende se realice la aproximación de que trata la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, pues su análisis lo realiza respecto de los porcentajes y dicho desarrollo jurisprudencial se ha efectuado respecto de las semanas de cotización, resultando improcedente en este caso en tanto al causante le hicieron falta para completar la densidad de semanas requerida para causar la pensión de vejez, un total de 23 semanas, cifra muy superior al 0,25 que ha admitido dicho desarrollo jurisprudencial; sin que sea plausible acudir a la norma que regula la pensión de invalidez, por no haberlo dispuesto así el legislador.

Lo anterior da lugar a estudiar la causación de la prestación bajo el principio de condición más beneficiosa, primero, en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993, en segundo término, en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, según el ajuste jurisprudencial plasmado por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU 005-18.

Tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993

La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha determinado la viabilidad de aplicación del principio cuando el afiliado reúne los requisitos exigidos por la normatividad inmediatamente anterior a la vigente en el momento de su fallecimiento, por conllevar la expectativa legítima del derecho, puntualizando en la sentencia SL 4650 de 2017 que en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993, “*durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional*”.

Esta Sala de Decisión Laboral ha venido apartándose respetuosamente de la postura adoptada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en cuanto a la temporalidad que prevé para la aplicación del principio en el referido tránsito legislativo,

¹² 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigitalizado, pág. 27/32

entendiendo que esa imposición a la aplicación del principio, arriesga el derecho a la igualdad de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social Integral, resultando contrario a la Constitución Política, máxime cuando la restricción no existe, si dicho principio se examina a la luz del tránsito legislativo existente entre la Ley 100 de 1993 primigenia y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

En ese sentido, la H. Corte Constitucional no ha impuesto dicho límite y ha contemplado, en sentencias como la SU-442 de 2016 y T-084 de 2017, que ante la diversidad de criterios entre las Altas Cortes y frente a interpretaciones que incluso podrían ser plausibles de las normas, el Juzgador está llamado a elegir la más favorable al afiliado o beneficiarios, y por ende más respetuosa de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y que en últimas, realizan a la seguridad social como derecho fundamental, obligación del Estado y principio fundante del mismo.

En el caso sometido a estudio de la Sala, Alain Darío Salazar Granda, no se encuentra dentro de los parámetros exigidos por la H. Corte Suprema de Justicia para dejar causada la pensión de sobrevivientes bajo ese tránsito normativo, pues falleció el 23 enero de 2017, sin cumplir con la condición del art. 46 de la Ley 100 de 1993 primigenia, pues el mismo establecía que el afiliado dejaba causada la pensión de sobrevivientes, cuando siendo cotizante activo, hubiere sufragado al menos veintiséis (26) semanas durante toda su vida laboral o, siendo inactivo, hubiere cotizado la misma cantidad de semanas, en el año inmediatamente anterior al deceso, condiciones no satisfechas por el señor Alain Darío Salazar Granda quien no contaba con semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, ostentando para la data del deceso, la calidad de cotizante inactivo.

Tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año

La H. Corte Constitucional fijó un test de procedencia en la sentencia SU 005 de 2018, para efecto de determinar la causación de una pensión de sobrevivientes en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Acuerdo 049 de 1990, adicional a que el afiliado, como ocurrió en el caso, al menos haya cotizado 300 semanas antes de la vigencia del actual sistema pensional.

En este punto se hace relevante exponer las declaraciones recibidas en el proceso a Zulmery Úsuga Velásquez y José Aldemar Salazar Granda.

Zulmery Úsuga Velásquez	Conoce a la demandante desde 1990 porque es cuñada de su esposo. La señora Margarita Flórez es ama de casa y no trabaja para el momento en que falleció su esposo, vive con sus dos hijos y era esposa de Alain; expresa que ellos nunca se llegaron a separar hasta que él falleció por un hurto. Antes de la muerte de su esposo la señora Margarita trabajaba en una empresa -papel familia- luego solo ha tenido trabajos por días; así mismo indicó que el causante trabajaba como vigilante en las calles devengando un salario mínimo, en vida de este pagaban arriendo y actualmente la demandante vive en casa propia.
-------------------------	---

José Aldemar Salazar Granda	La demandante vive actualmente con sus hijos Juan Manuel y Fernando, es ama de casa y trabaja por días, no recibe subsidios ni pensiones, que el señor Alain era su hermano y se dedicaba a la labor de vigilante callejero y velaba por el sostenimiento de su hogar pues la demandante era ama de casa, los ingresos del causante eran de un salario mínimo.
-----------------------------	--

Esta Sala, de acuerdo a los lineamientos de los artículos 48 y 54 del CPTSS procedió a reabrir el debate probatorio ampliando recibiendo interrogatorio de parte y ampliación de los testimonios recaudados en primera instancia así:

Margarita Aurora Flórez Zapata Demandante	Tiene tres hijos, trabaja como empleada del servicio doméstico, estuvo casada con Alain Darío Salazar, conviviendo con él durante 30 años desde el matrimonio – 06 de mayo de 1989- hasta la fecha en que él falleció el 23 de febrero de 2017. Expresa que en los tres últimos años de vida de su cónyuge este se dedicó a realizar labores de vigilancia callejera, trabajando en un área de viviendas y él celaba por las calles y cada determinado tiempo le pagaban por su labor, cada una de las viviendas le pagaba, esto fue en el barrio conquistadores, vigilaba casas por cuadras, cobraba 20 o 30 mil pesos por casa y eso le daba más o menos un mínimo, este servicio lo prestaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a su esposo no le pagaban seguridad social y no sabe él porque no cotizaba a la seguridad social. Con lo que su cónyuge devengaba pagan servicios, renta y alimentación; ella trabajaba uno o dos días en semana como empleada doméstica y percibía por esta labor cincuenta mil pesos por día. Dejó de laborar en papeles familia porque su hijo menor sufrió un accidente y le tocó salirse para cuidar de él. Su hijo Juan Manuel terminó de estudiar y se fue a vivir a España y actualmente trabaja como ayudante de construcción. Cuando su cónyuge falleció debió irse a vivir con su hija porque no le era posible pagar el apartamento en que Vivian, su hija trabajaba en un call center, ella empezó a trabajar más días a la semana y la familia de su cónyuge y sus propios familiares le comenzaron a colaborar para solventar la situación difícil en la que quedaron. En cuanto a su grado de escolaridad indica que únicamente terminó la primaria, mientras que su cónyuge si terminó el bachillerato.
José Aldemar Salazar Granda Testigo	Era hermano del causante, tenían una relación cercana y sabe que para la fecha del fallecimiento él trabajaba como vigilante callejero en conquistadores, no recuerda los datos exactos, pero él trabajaba en el barrio al frente de Makro, cuando lo asesinaron él iba para el trabajo, trabajaba en la calle vigilando las cuadras y se ganaba más o menos un salario mínimo. Sabe que su hermano era el que soportaba los gastos de la casa como arriendo, servicios y comida, no tiene conocimiento de cuanto eran los gastos de ese hogar. Indica que su cuñada la esposa de Alain no laboraba, ella era ama de casa y dependía de su hermano, después de la muerte de Alain

	le tocó empezar a trabajar porque él no dejó ni cesantías ni nada. Ella compró una casa cuando recibió la indemnización sustitutiva, yo le dije que comprara la casa, la casita le costó 60 millones y a ella le habían dado 92 millones. Considera que su hermano fue negligente al cotizar a la seguridad social, sin embargo también expresa que cuando se sostiene un hogar con el salario mínimo toca hacer un esfuerzo grande para poder suplir las necesidades de la familia
--	---

Valorada la prueba recibida, considera la Sala que los demandantes satisfacen el test de procedencia del principio de la condición más beneficiosa, según se explica a continuación:

- a) Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento. La demandante refirió haber realizado estudios solo hasta la primaria, dedicándose en vida a las labores del hogar y oficios domésticos esporádicos, de lo que se logra extraer que pertenecía a un grupo de especial protección dados los escasos recursos con los que contaba, era madre cabeza de familia y no contaba con escolaridad completa, que le permitiera acceder a una mejor oferta laboral.
- b) La carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada afecta directamente la satisfacción de necesidades básicas de los reclamantes, como es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. En torno a tales circunstancias, manifiestan los testigos y la demandante que luego del fallecimiento de su cónyuge las condiciones socioeconómicas del hogar fueron precarias, requiriendo la asistencia de familiares, e induciendo a la demandante a dejar su entorno social para convivir con una de sus hijas dada la imposibilidad de seguir sosteniendo el arriendo de la vivienda en que convivió con su cónyuge.
- c) Dependencia económica del causante antes del fallecimiento de éste, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante – beneficiario. Fueron congruentes los testimonios y la declarante al indicar que tanto ella como su hijo, para ese entonces menor de edad, dependían económicamente del causante y si bien respecto de la cónyuge la dependencia económica no fue absoluta pues refiere labores esporádicas como empleada doméstica, de ello no se puede predicar condiciones de independencia económica que les permitiera conservar unas condiciones dignas de vida, con posterioridad al fallecimiento del señor Alain Darío Salazar Granda, dando cuenta la historia laboral de la señora Margarita Aurora Flórez Zapata, que para el deceso del causante, no contaba con un empleo estable, vinculándose laboralmente más de un año después de dicho suceso.
- d) Que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes. La historia laboral del afiliado fallecido da cuenta de las cotizaciones que efectuó hasta el mes de agosto de 2013, siendo plausible para la Sala interpretar que dadas las condiciones de informalidad, en las que laboraba el

causante y los bajos ingresos económicos, no contaba con las condiciones socioeconómicas que le permitieran efectuar cotizaciones al Sistema General de Seguridad en Pensiones.

- e) Tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Requisito que se tiene por satisfecho, en tanto entre el momento de ocurrencia del fallecimiento (23 de febrero de 2017) y la reclamación administrativa de la prestación pensional trascurrieron menos de tres meses (siendo negada la prestación mediante comunicado del 05 de mayo de 2017¹³), transcurriendo entre la negativa y la presentación de la demanda (20 de septiembre de 2017) únicamente cuatro meses.

De lo anterior, se desprende que se satisfacen los requisitos del test contemplado en la Sentencia SU 005 de 2018 para que con ocasión al fallecimiento del señor Alain Darío Salazar Granda, se cause la pensión de sobrevivientes en virtud de la condición más beneficiosa de acuerdo a los parámetros del Decreto 758 de 1990, razón por la cual se **revocará** íntegramente la sentencia de primera instancia, conocida en consulta.

b) Margarita Aurora Flórez Zapata y Juan Manuel Salazar Flórez, como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

Para lo que interesa, los literales a) y c) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, consagra que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

...

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993”.

Consecuentemente se resalta que en torno a la cónyuge supérstite el precedente judicial vertical en la materia viene sosteniendo que la cónyuge debe acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo, requisito que valorada la prueba recibida en el proceso, se tiene por acreditado, en tanto de la testimonial recaudada se desprende que los

¹³ 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigitalizado, pág. 15/17

cónyuges convivieron de manera ininterrumpida entre la fecha del matrimonio -06 de mayo de 1989- y la fecha del deceso del causante -23 de enero de 2017- es decir durante cerca de 28 años, nunca los vieron separarse.

En cuanto a Juan Manuel Salazar Flórez, se tiene que, de acuerdo con su Registro Civil de Nacimiento, era hijo del causante y la demandante, contando para el 23 de enero de 2017 – fecha del fallecimiento de su padre - con 12 años de edad, alcanzado la mayoría de edad el 16 de marzo de 2022.

Se encuentran acreditadas las condiciones de beneficiarios de los demandantes Margarita Aurora Flórez Zapata y Juan Manuel Salazar Flórez en sus calidades de cónyuge e hijo, respectivamente.

c) Disfrute de la prestación

El señor Alain Darío Salazar Granda falleció el 23 de enero de 2017¹⁴, por lo que a partir del día siguiente se causó la prestación a favor de Margarita Aurora Flórez Zapata y Juan Manuel Salazar Flórez, La cuantía de la mesada para ese año, según se desprende de las liquidaciones efectuadas por la Sala, equivale a la suma de \$ 838.210 con un IBL equivalente al promedio de los 10 últimos años de cotización del causante por ser este el más favorable¹⁵, y una tasa de reemplazo del 75% de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993¹⁶.

d) Prescripción

Los demandantes reclamaron administrativamente la pensión de sobrevivientes el 11 de abril de 2017, siendo negada mediante comunicado del 05 de mayo de 2017, emitido por Colfondos S.A.¹⁷ Habiéndose radicado la demanda el 20 de septiembre de 2017¹⁸, no habiendo transcurrido entre la negación de la prestación y ese momento, los tres años consagrados en los art 488 del CST y 151 del CPTSS, no prescribió mesada pensional alguna.

Consecuentemente Colfondos S.A. adeuda a la señora Margarita Aurora Flórez Zapata, por concepto de retroactivo causado entre **el 24 de enero de 2017 y el 30 de agosto de 2023**, la suma de cuarenta y nueve millones seiscientos cuatro mil ochocientos diez pesos (**\$49.604.810,00**) y a Juan Manuel Salazar Flórez concepto de retroactivo causado entre **el 24 de enero de 2017 y el 16 de marzo de 2023** –fecha en la que arribó a la edad de 18 años sin demostrar imposibilidad para laboral en razón a sus estudios-, la suma de veintinueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos (**\$29.858.142,00**), detallados como se indica a continuación:

¹⁴ 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigitalizado, pág. 20

¹⁵ Según las liquidaciones anexas

¹⁶ El causante dejó acreditadas 1277 semanas, a las que se le restan las primeras 500 arrojan 777 semanas adicionales, de las que se obtienen 15 grupos de 50 semanas, dando con ello lugar a aumentar la tasa de reemplazo en 30% para una tasa equivalente al 75%

¹⁷ 01PrimerInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 15/17

¹⁸ 01PrimerInstancia, 02ExpedienteDigitalizado, pág. 9

RETROACTIVO PENSIONAL						
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo	total retroactivo hijo	total retroactivo cónyuge
2017	4,09%	12	\$ 832.210	\$ 9.986.520	\$ 4.993.260	\$ 4.993.260
2018	3,18%	13	\$ 866.247	\$ 11.261.216	\$ 5.630.608	\$ 5.630.608
2019	3,80%	13	\$ 893.794	\$ 11.619.323	\$ 5.809.661	\$ 5.809.661
2020	1,61%	13	\$ 927.758	\$ 12.060.857	\$ 6.030.428	\$ 6.030.428
2021	5,62%	13	\$ 942.695	\$ 12.255.037	\$ 6.127.518	\$ 6.127.518
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000	\$ 1.266.666	\$ 11.733.334
2023		8	\$ 1.160.000	\$ 9.280.000	\$ 0	\$ 9.280.000
			TOTAL	\$ 79.462.953	\$ 29.858.142	\$ 49.604.810

La mesada pensional a cancelar a la demandante a partir del 1 de septiembre de 2023 asciende a un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000,00), equivalentes al salario mínimo de este año, por devenir su aumento inferior al salario mínimo a partir del año 2022, debiendo ser reajustada a dicho monto.

De este retroactivo pensional liquidado y el que se cause posteriormente hasta el momento de pago de lo adeudado, **se autorizará a la demandada que descuente el valor de los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud**, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y a lo decantado por la Sala de Casación de la H. Corte Suprema de Justicia en esta materia¹⁹.

Asimismo, se autoriza compensar la suma pagada por concepto de devolución de Saldos de la cuenta de Ahorro Individual del causante, es decir la suma de \$92.534.646²⁰, que deberá ser indexada al momento de efectuarse el descuento, pues si bien es cierto que la parte actora actuó de buena fe, también lo es que tal capital fue sustraído de la Cuenta de Ahorro Individual, para el pago de una prestación a la que no había lugar, generándose una depreciación en el dinero razón por la cual, no constituyendo esto una condena, deberá reintegrar lo recibido garantizándose el valor real y actual de tales conceptos.

c) intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993

Si bien se encuentra legalmente prevista en el artículo 141 de la ley 100 de 1993²¹ la causación de intereses moratorios en favor de los pensionados ante la tardanza de la administradora de pensiones en el pago de las mesadas pensionales, dentro de los términos legales, que para la pensión de sobrevivientes es de dos (02) meses contados a partir de la reclamación, en este caso la Sala estima que no hay lugar a conceder los mismos, pues en esta oportunidad la prestación se concede en aplicación del principio de condición más beneficiosa, el cual actualmente cuenta con criterio de aplicación disímil entre las Altas Cortes, de suerte que el actuar de la AFP no se puede catalogar como caprichoso.

¹⁹ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

²⁰ 01PrimeralInstancia; 02ExpedienteDigitalizado, pág. 99

²¹ El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

Sin embargo, se ha de garantizar que los demandantes perciban lo adeudado en su real valor, por ende, se ordenará la indexación del valor de las condenas.

Para indexar, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, puesto que son prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada mesada a indexar.

III. EXCEPCIONES

Se entienden implícitamente resueltas las excepciones formuladas por la demandada, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, por las razones expresadas previamente.

IV. COSTAS

Costas en ambas instancias a cargo de Colfondos S.A., en esta instancia se fijan en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año dos mil veintitrés, es decir la suma de un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000,00).

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia proferida 24 de septiembre de 2018, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA Y JUAN MANUEL SALAZAR FLÓREZ contra COLFONDOS S.A., para en su lugar declarar que los demandantes si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Alain Darío Salazar Granda.

Colfondos S.A. reconocerá y pagará a la señora MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA, la pensión de sobrevivientes que se causó el 24 de enero de 2017. Se pagarán

trece (13) mesadas por año. Colfondos S.A., pagará a la demandante, la suma de cuarenta y nueve millones seiscientos cuatro mil ochocientos diez pesos (**\$ 49.604.810,00**) por concepto de retroactivo pensional causando entre el 24 de enero de 2017 y el 30 de agosto de 2023, asimismo pagará a JUAN MANUEL SALAZAR FLÓREZ la suma de veintinueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos (**\$29.858.142,00**) por concepto de retroactivo pensional causando entre el 24 de enero de 2017 y el 16 de marzo de 2022; suma que deberá ser debidamente indexada al momento del pago.

A partir del 01 de septiembre de 2023 proseguirá pagando a la señora MARGARITA AURORA FLÓREZ ZAPATA por concepto de mesada pensional el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023, es decir un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000,00), y anualmente se incrementará conforme dispone el art.14 de la Ley 100 de 1993.

Se autoriza a Colfondos S.A., descontar del retroactivo de mesadas pensionales el valor de los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como compensar la suma de \$ 92.534.646, pagada a título de devolución de saldos, la cual deberá ser indexada al momento de efectuarse la compensación.

SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de Colfondos S.A. En esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000,00).

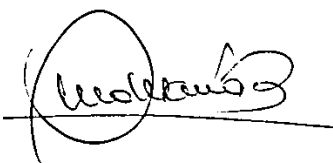
Se ordena notificar lo resuelto por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE